



**InSight  
Crime**

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN  
DEL CRIMEN ORGANIZADO

# El Dorado de Maduro: bandas, guerrillas y el oro de Venezuela



## Tabla de contenidos

<b>1. Gobernadores, bandas y la guerra por el oro de Bolívar .....</b>	<b>3</b>
<i>Un viejo forastero .....</i>	<i>4</i>
<i>El Arco Dorado.....</i>	<i>6</i>
<i>El oro de tontos de los gobernadores .....</i>	<i>8</i>
<i>Un dudoso defensor de los derechos humanos.....</i>	<i>10</i>
<b>2. Manos de metal y patas de goma: la guerrilla colombiana y el oro venezolano .....</b>	<b>13</b>
<i>La llegada de las guerrillas.....</i>	<i>15</i>
<i>Guerrilla, ejército y sindicatos .....</i>	<i>18</i>
<i>Un ejército en desaparición.....</i>	<i>20</i>
<b>3. El “Rebelde del Sur”: el ascenso de la Organización R.....</b>	<b>23</b>
<i>De la cancha de fútbol al campo de batalla.....</i>	<i>24</i>
<i>El espejismo de Maduro.....</i>	<i>27</i>
<i>La guerra y la paz .....</i>	<i>29</i>
<i>¿Una nueva alianza?.....</i>	<i>30</i>



# 1. Gobernadores, bandas y la guerra por el oro de Bolívar

*El plan del presidente Maduro para ayudar a los gobernadores a financiar sus estados regalando una mina de oro a cada uno pronto trajo problemas. En el populoso estado de Bolívar, esto desató el conflicto de manera inmediata. Las bandas criminales que controlaban el corazón minero de Venezuela nunca se rendirían. Un grupo en particular ha liderado la resistencia.*

El 5 de noviembre de 2019, aparecieron **panfletos amenazantes** en las calles de El Callao, pueblo minero del estado Bolívar, al este de Venezuela. El municipio ya estaba en alerta: una semana antes, en una de sus carreteras había aparecido una **cabeza amputada**. Los panfletos contenían un mensaje enviado por el cabecilla de una pandilla local, Alejandro Rafael Ochoa Sequea, alias “Toto”, al alcalde municipal, Alberto Hurtado.

“Nos vendiste entregándonos al gobierno”, decían los panfletos. “Renuncia, tienes 48 horas para hacer las maletas porque va a haber más muertes, y si no te vas, vendré por tu cabeza”.

Esa noche, hombres armados recorrieron las calles del pueblo en motocicletas, **disparando con sus armas** y haciendo estallar una granada.

El mensaje de Toto y la campaña de terror de su pandilla se produjeron poco después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara **una nueva política**: le daría a cada gobernador estatal una mina de oro para ayudar a financiar sus administraciones. Pero había un problema: las minas de oro de Bolívar estaban controladas por violentas bandas criminales conocidas como sindicatos. Y sindicatos como el de Toto no tenían la intención de renunciar a sus minas así sin más.

Al enfrentar a los gobernadores y las pandillas, el gobierno venezolano avivó las llamas de la guerra para controlar el oro de Bolívar, una guerra que continúa hasta el día de hoy. En El Callao, esta guerra ha llevado a la banda de Toto a resistir **durante más de dos años**, oponiéndose violentamente a las fuerzas concentradas del Estado venezolano. Y esta resistencia se ha convertido en un símbolo de la incapacidad del Estado venezolano para controlar uno de sus últimos salvavidas económicos: el oro.

## Un viejo forastero

Desde el principio, Toto y su pandilla han tenido conflictos con el Estado venezolano, pero en Bolívar la situación ha sido especial.

En el momento de la formación de la pandilla alrededor de 2014, Bolívar estaba gobernado por un exmilitar, **camarada** del expresidente de Venezuela Hugo Chávez: el general Francisco Rangel Gómez. De 2008 a 2012, Rangel estuvo al frente de los intentos de Chávez de centralizar el control del Estado sobre el oro venezolano mediante **la expropiación** de las operaciones mineras internacionales y **exigiendo a los productores** que vendieran la mayor parte de su oro al Banco Central de Venezuela (BCV).

Estas políticas devastaron el sector del oro de Venezuela. El capital extranjero salió del país, y **Minerven**, la compañía minera estatal, experimentó un cráter productivo dado que no podía acceder a recursos financieros. La minería industrial dio paso a operaciones a pequeña escala y no reguladas, controladas y explotadas por bandas criminales rapaces. Y en este caos Rangel vio una oportunidad.

*“Te dimos **medio kilo de oro** para tu campaña para el Congreso y ganaste”.*

Según **testimonios** de dos **exagentes de las fuerzas de seguridad**, existía una red clandestina entre las bandas armadas del círculo cercano de Rangel y las concesiones criminales repartidas en las zonas mineras de Bolívar. Dichas bandas pedían una cosa a cambio: oro.

“En el estado de Bolívar”, dice una de las fuentes, “es casi imposible aprehender a un miembro de un grupo del crimen organizado que no esté conectado con Julio César Fuentes Manzulli [entonces jefe de la policía estatal de Bolívar], el brazo fuerte del gobernador Rangel”.

Esto no era exactamente así. En El Callao, que históricamente ha sido un centro minero, los grupos criminales arraigados en las comunidades mineras locales comenzaron a luchar contra el feudo criminal de Rangel. El más

poderoso de esos grupos era el de Toto, que surgió en el sur de El Perú, donde se encuentran muchas de las minas que Minerven había abandonado.

Lo que a Toto le faltaba en apoyo político, lo suplió mediante estrechos lazos comunitarios y actos violentos. Su banda logró resistir las esporádicas operaciones policiales y aprovechó el debilitamiento de sus rivales para apoderarse de sus minas, e incluso **arremetió violentamente** contra los grupos respaldados por Rangel. Hacia 2016, Toto ya se había establecido como el poder criminal independiente dominante en El Callao.

“El único sector que [el gobierno] no puede controlar es El Perú”, dijo a InSight Crime en 2020 un residente de El Callao, quien no quiso divulgar su identidad por razones de seguridad. “¿Por qué? Porque todos los miembros de la banda son oriundos de El Perú. La gente de por aquí protege a los criminales porque los vieron crecer”.

En 2017, Rangel fue obligado a abandonar el cargo de gobernador. Fue reemplazado por Justo Noguera Pietri, una figura de la élite militar de Venezuela. Noguera tenía la tarea de controlar las anárquicas bandas mineras que Rangel había permitido prosperar.

Bajo el mandato de Noguera, las operaciones policiales se convirtieron en verdaderas ofensivas militares. En agosto de 2018, los territorios de Toto fueron allanados por unos **200 militares y policías**. La operación descubrió espantosas evidencias del reinado de terror de Toto, entre ellas una fosa común que contenía **14 cráneos humanos**.

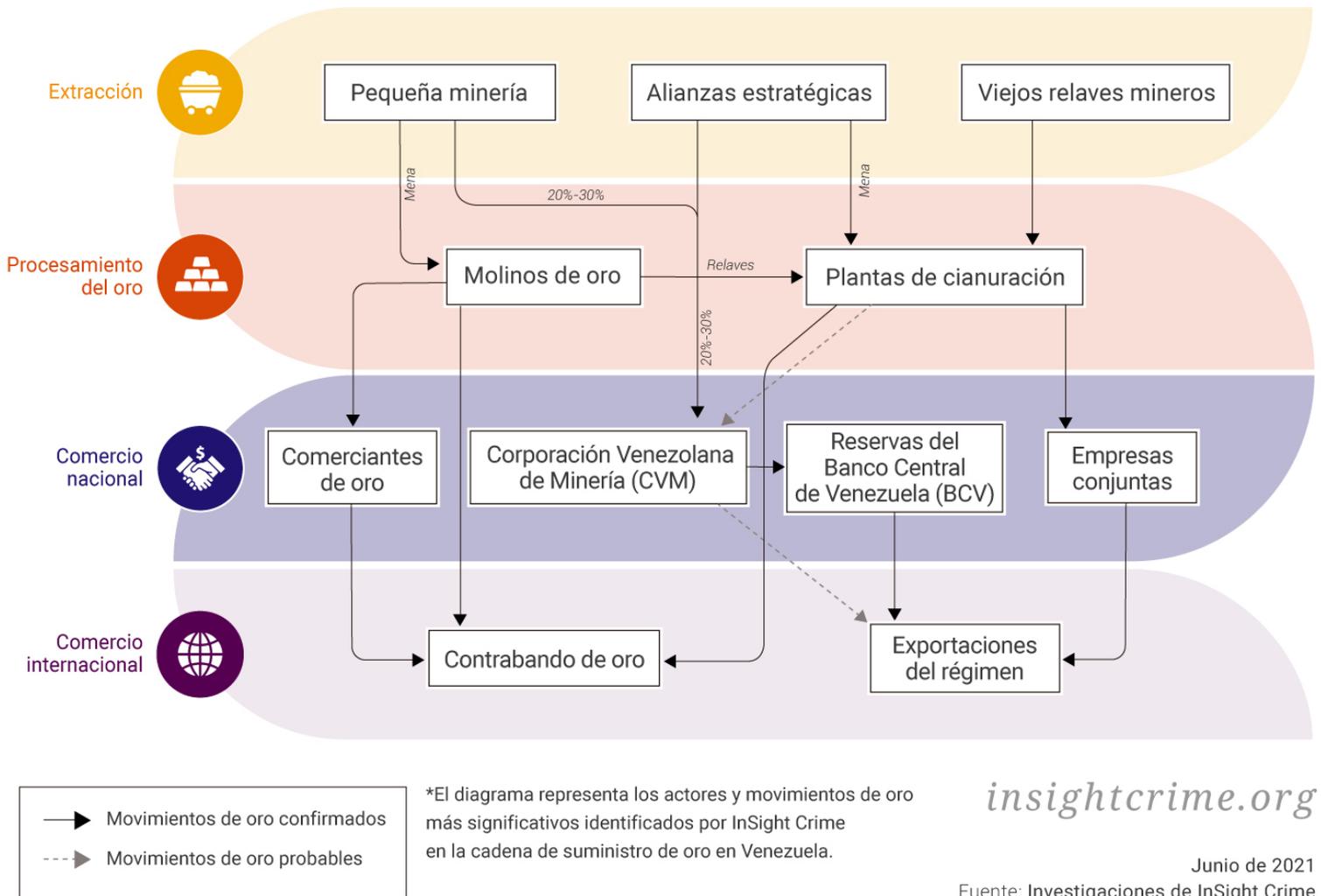
Toto redobló sus agresiones. Durante el año siguiente, su banda hizo varias demostraciones desafiantes, incluida la **mutilación** de un joven desertor del ejército y la publicación de **un video que se hizo viral**, en el que se veía a los pandilleros haciendo disparos al aire con armas de alto calibre.

Toto no era inflexible, y estaba dispuesto a engrasar su maquinaria cuando fuera necesario. En 2019, su agresiva amenaza contra Hurtado, el alcalde de El Callao, contenía una sorprendente acusación:

“Te dimos medio kilo de oro para tu campaña para el Congreso y ganaste. Volviste y te di 650 gramos para llegar a la alcaldía y ganaste. Nos vendiste y no hiciste nada por nosotros”, se lee en los panfletos.

Pero la ira de Toto iba contra el objetivo equivocado. Para entonces, los planes para el sector del oro de Venezuela estaban siendo controlados a nivel nacional.

# La cadena de suministro de oro en Venezuela



## El Arco Dorado

Los intentos del Estado de controlar a la pandilla de Toto y otros sindicatos hacían parte de un plan más amplio para el comercio de oro de Venezuela.

En febrero de 2016, Maduro había lanzado una nueva estrategia para revitalizar el sector, denominada **Arco Minero del Orinoco (AMO)**. El proyecto buscaba impulsar la extracción de minerales en una franja del sur de Venezuela, mediante la invitación a compañías mineras internacionales para que conformaran empresas en conjunto con el Estado venezolano. La propiedad de dichas empresas se dividiría en un 45 y un 55 por ciento, y el gobierno se quedaría con la mayor parte.

Cuando se solidificó el marco legal del AMO en 2017, el gobierno anunció que la industria minera sería “la respuesta a la guerra económica” de las sanciones de Estados Unidos y el paso hacia una Venezuela pospetrolera.

Pero el sector minero, corrupto y devastado por el conflicto, fue difícil de vender a las empresas internacionales. El poco interés corporativo que existía se evaporó cuando las sanciones internacionales comenzaron a llegar.

Las únicas inversiones significativas no se produjeron en operaciones mineras, sino en nuevas plantas de procesamiento, que utilizaban técnicas a base de cianuro para extraer un mayor porcentaje de oro de la materia prima. Esto permitiría un procesamiento del oro más eficiente en el futuro, pero también ofrecía ganancias rápidas, dado que permitía que el oro se extrajera de los relaves (residuos) de operaciones mineras anteriores.

“Cuando se creó [el AMO], el objetivo era que también pudieran explotar y producir oro, pero lo único que hicieron fue poner esas plantas”, dijo un ingeniero de minas de la región a InSight Crime. “Pero no tienen minas. Se necesitan minas para tener algo que procesar en las plantas”.

Las plantas de cianuración proliferaron rápidamente, según múltiples investigaciones de los medios, dado que eran respaldadas por figuras de alto rango dentro del régimen y por sus socios y aliados. En ausencia de minería industrial, los actores que controlaban las plantas se enfocaron en conseguir relaves de las pilas de desechos y de los lagos de relave alrededor de las antiguas minas de Minerven, así como en aquellos abandonados por los molinos de procesamiento rústico operados por mineros a pequeña escala. Ambos no tuvieron más remedio que negociar con los sindicatos que controlaban los territorios.

“Están haciendo minería a la inversa”, le dijo un economista minero a InSight Crime. “Primero pusieron las plantas de procesamiento, y después fueron a buscar material”.

Dado que las empresas conjuntas estaban estancadas y los relaves representaban una ganancia inesperada que pronto se agotaría, el Estado desarrolló un nuevo plan: las “alianzas estratégicas”. Esta forma de concesión minera les asigna a empresas o a particulares áreas para explotar por cualquier medio, para que a cambio den un porcentaje de la producción a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la entidad encargada de mantener el flujo de oro en las arcas estatales venezolanas.

Estos furtivos contratos atrajeron cada vez más actores a El Callao. En 2018, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico había registrado 295 acuerdos de este tipo en Bolívar. Un año más tarde, la cifra aumentó a más de 1.000. Pero pocos tenían experiencia en minería: eran un montón de compinches militares y oportunistas que querían probar suerte.

La CVM no podía darse el lujo de ser exigente. Dado que no logró atraer inversores de calidad, la nueva estrategia se enfocó en la cantidad. Cuantas más personas probaran suerte, era más probable que al menos algunas dieran con un tesoro y entregaran una parte al CVM. Pero a medida que se amontonaban más supuestos mineros en el AMO, el tráfico ilícito fluía desenfrenado y se desataban tensiones internas.

## El oro de tontos de los gobernadores

En este contexto, el hecho de que Maduro le entregara minas de oro a sus gobernadores parecía una idea grandiosa, pero fue fruto de la desesperación.

Cuando anunció la iniciativa, Maduro afirmó que sería “un nuevo modelo de alianza estratégica”. Si bien se desconocen sus intenciones exactas, quizá esperaba que esos políticos leales demostraran su confiabilidad en el desarrollo de las concesiones. Sin embargo, la esperanza de que los gobernadores conseguirían la inversión necesaria para revitalizar el sector minero de Bolívar estaba mal fundamentada.

“[Los gobernadores] pensaron que llegarían y encontrarían minas con una planta de procesamiento en pleno funcionamiento que produciría barras de oro”, dijo burlescamente un ingeniero de minas que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Cuando se dieron cuenta de que tendrían que invertir dinero, el proyecto murió sin ni siquiera haber nacido”.

Algunos gobernadores, sin embargo, vieron una oportunidad de negocio diferente.

A principios de noviembre de 2019, Jorge Luis García Carneiro, entonces gobernador del estado Vargas, llegó a Bolívar. En lugar de establecer una nueva operación minera, García tomó el control de la mina de La Gloria, que era considerada una de las más ricas de El Callao.

*“La banda de El Perú es la única que no le paga al Estado”.*

“En La Gloria hubo un boom del oro, pero el gobierno se lo apropió”, cuenta un habitante de El Callao, que no quiso que su identidad se divulgara por razones de seguridad. “Expulsaron a los criminales y pusieron a su propia gente”.

La Gloria no estaba dentro del territorio de Toto, pero la toma de posesión envió un mensaje claro a los sindicatos de El Callao: o trabajaban con los aliados de Maduro o no trabajaban en absoluto.

“Lo de alianza estratégica es solo un seudónimo que el gobierno les da a estas organizaciones”, dijo a InSight Crime un minero de El Callao, quien pidió permanecer en el anonimato por motivos de su seguridad. “La organización trabaja con los criminales, y estos son los que ponen a los mineros a trabajar. Ellos son los que controlan a la población. Los criminales forman parte de la alianza porque de lo contrario el gobierno los mata. Es así de sencillo”.

En ese momento, había una creciente evidencia de que no solo las fuerzas de seguridad venezolanas hacían cumplir este acuerdo, sino también las guerrillas colombianas. En su mensaje de noviembre de 2019, Toto [denunció este acuerdo](#), acusando al gobernador Noguera de trabajar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de apoderarse de sus territorios.

Otros sindicatos no tuvieron más remedio que alinearse, pero Toto no dio el brazo a torcer. Días después de la visita del exgobernador García Carneiro, Toto lanzó su ultimátum a Hurtado mientras sus pistoleros aterrorizaban a la ciudad. Esto generó mucha atención, pues Toto y su banda se convirtieron en el principal objetivo del ejército.

“La banda de El Perú es la única que no le paga al Estado”, dijo sin rodeos un exagente del ejército que sirvió en El Callao, quien habló bajo condición de anonimato. “Entonces, se dio luz verde para la guerra”.

*“Con las fuerzas que  
tenemos **somos capaces**  
de defender nuestra tierra”.*

El Callao fue [militarizado](#) y la mayoría de sus tiendas y edificios públicos cerraron. Hurtado se ocultó, pero no renunció. Al final del año se restableció cierta tensa calma, pero esta no duró mucho.

La fachada de paz en El Callao se vino abajo tras el asesinato de un músico de calipso de 76 años. Carlos Clark, quien durante años había dirigido una operación minera legal en el área, fue asesinado a tiros en la calle el 8 de mayo de 2020. Clark había sido nombrado parte del [“patrimonio cultural vivo”](#) de Bolívar y era una figura popular a nivel local. Su asesinato causó conmoción en la ciudad.

Las autoridades locales [incriminaron](#) a la banda de Toto por el asesinato, sosteniendo que mataron a Clark porque se negó a pagar las extorsiones de la banda. Pero tras su muerte el Estado tomó posesión de su mina y la entregó a Mibiturven, una empresa conjunta que tenía [conexiones con Alex Saab](#), el hombre acusado de ser [el principal blanqueador de dinero del régimen de Maduro](#). Por eso muchas personas de la región dudan de la versión oficial de los hechos.

“Dicen que fueron sicarios de la banda de Toto [quienes mataron a Clark], pero hay que ver quién se benefició de ese asesinato, en manos de quién terminó la mina”, dijo a InSight Crime un líder político de la oposición local, quien habló bajo condición de anonimato.

El asesinato de Clark llevó a que **se intensificaran las operaciones policiales** contra la pandilla de Toto y su red.

El conflicto se avivó una vez más, tras lo cual siguieron meses de sangrientos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la banda de Toto, con **numerosas muertes** en ambos lados, así como con la **incautación de armas** y el arresto de docenas de **integrantes de la banda**.

En septiembre de 2020, Toto parecía estarse rindiendo. En un sorprendente cambio en las tácticas de la banda, **publicó un video** en el que llamaba a la paz. En el video, grabado en la selva, un hombre enmascarado hablaba ante la cámara, sentado en una mesa de plástico, rodeado por jóvenes fuertemente armados y con una bandera venezolana como telón de fondo.

“En nombre de El Perú estamos llamando al diálogo porque nos encontramos en una guerra que no tiene sentido por el simple hecho de defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo”, leía el hombre en una hoja de papel. “No queremos más muertes; queremos que se detenga este derramamiento de sangre”.

Pero esa petición era al mismo tiempo una amenaza.

“Esto no significa que no estemos preparados para la guerra”, advirtió. “Con las fuerzas que tenemos somos capaces de defender nuestra tierra”.

El gobierno hizo caso omiso del video. Días después, dos miembros de la banda **fueron asesinados** a tiros por unidades militares en El Perú, a lo que le siguieron **13 arrestos**. Los ataques continuaron durante meses.

La apelación de Toto había sido rechazada.

## **Un dudoso defensor de los derechos humanos**

El 27 de marzo de 2021, el excongresista Wuihelm Torrellas Martínez fue **interceptado** por hombres armados cuando conducía por la calle principal de El Perú. Torrellas y su guardaespaldas fueron llevados a una zona montañosa en las afueras de El Callao, que por mucho tiempo ha sido utilizada como escondite por la banda de Toto.

Según el relato de Torrellas a las autoridades, referido por el periodista local [Pableysa Ostos](#), sus captores lo acusaron de ser informante de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela. Exigían 15 kilos de oro para su liberación. Como el rescate no llegó, decapitaron al guardaespaldas de Torrellas.

El excongresista cuenta que logró escapar de sus captores en las primeras horas de la madrugada y esconderse en las montañas hasta que salió el sol.

Días después, se envió una unidad militar al sitio donde Torrellas había sido retenido. Encontraron el sitio abandonado, con el camión de Torrellas estacionado afuera. Uno de los agentes abrió [la puerta del conductor](#). Habían instalado una granada, según le contó a Ostos un funcionario asignado al caso. Cuatro agentes resultaron heridos en la explosión.

El incidente fue una clara demostración de que, después de más de un año de presiones militares, Toto todavía podía humillar a las fuerzas estatales que buscaban expulsarlo.

La furia de Toto parecía concentrarse cada vez más en la DGCIM. A medida que el caos se apoderaba del AMO, la temida unidad de contrainteligencia militar de Venezuela asumía un papel cada vez mayor en Bolívar, lo que incluía la coordinación de ataques contra los partidarios de Toto y la seguridad de las áreas ganadas por las fuerzas estatales.

La DGCIM tiene la mala reputación de cometer desapariciones, [torturas](#) y [otras violaciones](#). Dado que era incapaz de derrotar a Toto, la DGCIM dirigió sus acciones contra [los pequeños mineros](#).

“Hay mucha persecución por parte de la DGCIM contra cualquiera que intente extraer material”, le dijo a InSight Crime un periodista especializado en la región, quien habló bajo condición de anonimato. “Es como una policía estatal”.

Irónicamente, esto le ha dado a Toto la oportunidad de aparecer como un buen tipo. En abril de 2021, publicó [otro video](#) con un tono muy diferente al tono conciliador del video anterior.

“Cesen los allanamientos y robos de bodegas, molinos y casas, paren ya con eso. Si no, vamos a implementar una campaña de terror, suspenso y bomba a todos los funcionarios en El Callao. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”, amenazaba ante la cámara.

Esta retórica revolucionaria, proferida por el líder de una pequeña banda arraigada en un solo sector de un solo municipio en el este de Venezuela, resultaba absurda, al igual que las afirmaciones de un asesino y extorsionador

de que estaba protegiendo los derechos humanos. Pero quizá no era más absurda que el plan de Maduro de que los gobernadores estatales financiaran unas administraciones en bancarrota con sus propias minas de oro.

Y a pesar de las continuas **ofensivas militares** y del **arresto de muchos mineros**, al momento de escribir este artículo, Toto continúa resistiendo en El Perú, llevando a cabo **espectaculares actos de violencia** de manera esporádica.

Por su parte, los gobernadores están dando pocas señales de vida. Y dado el caos de seguridad, así como el hecho de que los actores estatales están concentrados en saquear todo lo que puedan, el control del gobierno de Maduro sobre el comercio de oro parece ser cada vez más débil.

---



## 2. Manos de metal y patas de goma: la guerrilla colombiana y el oro venezolano

*Hombres armados con la insignia de una estrella roja y el rostro del Che Guevara merodeaban cerca de la frontera entre Venezuela y Guyana. Aunque tienen bastantes armas y están bien entrenados, ellos afirman que no están vinculados con la guerrilla, pero lo más seguro es que sí hacen parte del ELN, la guerrilla más poderosa de la región. Pronto se enfrentaron a las bandas locales, bien establecidas, por el control de las minas ilegales de oro. Para ellos y para sus patrocinadores en el gobierno.*

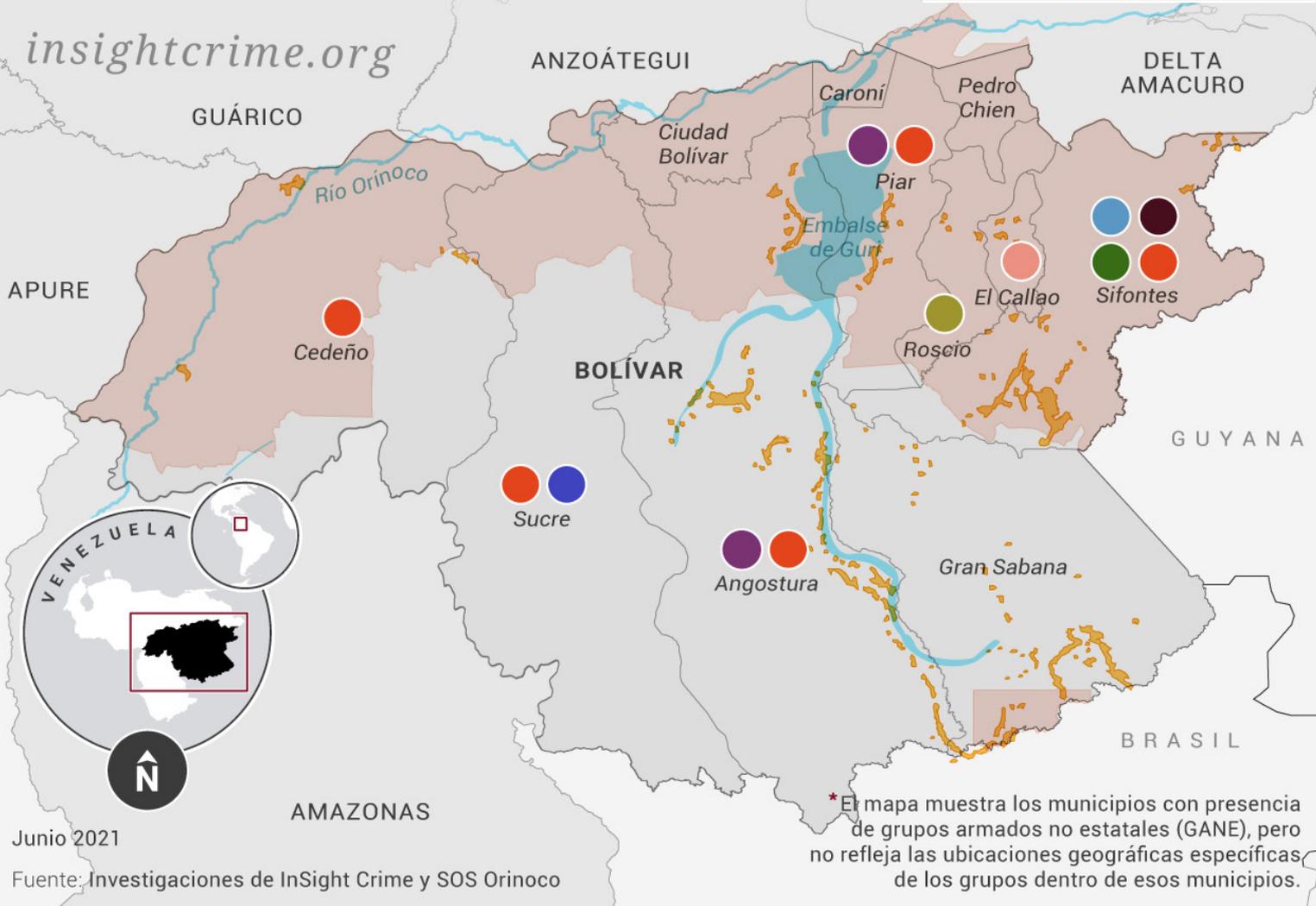
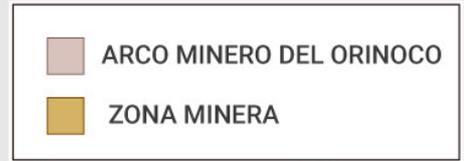
El 14 de octubre de 2018, un grupo de mineros de oro fueron emboscados por hombres armados cerca de la mina Corre Gente, en el municipio de Sifontes, cerca de la frontera de Venezuela con Guyana. Siete fueron **fusilados al estilo ejecución**, con una sola bala en la cabeza. Dieciséis más desaparecieron.

La masacre estuvo rodeada de misterios. Públicamente, las autoridades del estado Bolívar **culparon del hecho** al conflicto entre bandas mineras locales, especialmente la liderada por el gánster local Jhosué Zurita, alias “El Coporo”. Pero los sobrevivientes y familiares de las víctimas que hablaron con **periodistas locales** y **representantes** de la oposición política de Venezuela cuentan **una historia diferente**: la mina Corre Gente había sido tomada por un grupo guerrillero colombiano proveniente de muy lejos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un año después, el teniente coronel Ernesto Solís, entonces comandante de la base militar de Tarabay, cerca de donde ocurrieron los hechos, concedió una entrevista a InSight Crime. Su relato de los hechos que condujeron a la masacre, aunque es ambiguo, señala que el grupo que cometió la masacre no era una pandilla cualquiera, sino un grupo guerrillero que se hacía llamar Movimiento Che Guevara.

# Minería ilegal y presencia criminal en Bolívar

insightcrime.org



Junio 2021

Fuente: Investigaciones de InSight Crime y SOS Orinoco

\* El mapa muestra los municipios con presencia de grupos armados no estatales (GANE), pero no refleja las ubicaciones geográficas específicas de los grupos dentro de esos municipios.

## PRESENCIA DE GANE EN LOS MUNICIPIOS

- Megabanda de Johan Petrica
- Sindicato de El Perú
- Tren de Guayana
- ELN / Grupos Guerrilleros Independientes
- Banda de El Negro Fabio
- Organización 3R
- Banda de El Ciego
- Disidencias de las FARC

## BASTIONES DE LOS GANE



“El Coporo envió una invitación a esa gente del Che Guevara: ‘Hagamos una reunión para dividir territorios’ [...] Fueron cinco; mataron a cuatro, y uno escapó”, dijo Solís en la entrevista con InSight Crime. “¿Qué hizo el grupo? Fueron hasta el cruce y bloquearon la carretera. [El Coporo] intentó infiltrarse entre la gente que estaba entrando [a la zona minera], pero los guerrilleros sabían quiénes eran. Mataron a esas siete [personas]: dos mujeres y cinco hombres”.

La masacre de Corre Gente atrajo la atención sobre un rumor que ya se venía difundiendo en Bolívar: el ELN avanzaba sobre el corazón minero de Venezuela y para ello había sido invitado por el gobierno. Su objetivo: poner orden en la anárquica región minera de Venezuela y canalizar sus riquezas hacia la élite chavista.

Pero tres años después, parece que el grupo guerrillero más poderoso de la región no ha logrado dominar a Bolívar.

## La llegada de las guerrillas

Las guerrillas de Colombia quizá provenían de un lugar muy lejano del este de Venezuela, pero estaban en [territorio económico que les era familiar](#).

En el vecino estado Amazonas, en límites con Colombia, las comunidades indígenas habían estado reportando las incursiones en minas de oro ilegales por parte de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante al menos [cinco años](#). Cuando las FARC se desmovilizaron después de firmar acuerdos de paz con el gobierno colombiano en 2016, se abrió una puerta para el segundo ejército guerrillero más grande de Colombia: el ELN.

Según el diario [El Tiempo](#), en un informe corroborado por un exfuncionario del gobierno colombiano en la región fronteriza, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, la entrada del ELN a Amazonas fue negociada con disidentes del proceso de paz de las FARC que se habían negado a desmovilizarse. InSight Crime se ha referido a estos elementos disidentes como la [ex-FARC mafia](#).

Pero las disidencias de las FARC no eran los únicos aliados del ELN. En grabaciones [publicadas por el medio de investigación venezolano ArmandoInfo](#) en 2021, que fueron grabadas a principios de 2020, un comandante del ELN le explica a una asamblea indígena la agenda de la guerrilla en la región.

“¿Hay un compromiso con el Estado venezolano? Sí, lo hay”, declaró el comandante. “Este país enfrenta una amenaza de invasión. El país necesita amigos, aliados, colaboradores, servidores y vecinos; por eso están aquí el ELN y las FARC”.

Las grabaciones de audio también dan indicios sobre la naturaleza de la relación entre la guerrilla y el Estado venezolano. En 2016, el gobierno del presidente Nicolás Maduro había abierto grandes franjas de Bolívar para la explotación de oro, coltán y otros minerales, con el fin de reforzar las finanzas de Venezuela. El proyecto fue conocido como el Arco Minero del Orinoco (AMO).

“Hemos tenido reuniones con 75 líderes de comunidades mineras indígenas en Caicara, Manapiare, Parguaza y El Burro”, cuenta un comandante guerrillero. “¿Quién dirige estas reuniones? El gobierno. ¿A quién se invita? Al ELN y las FARC... ¿Qué necesita el Arco Minero? Seguridad en el territorio. La seguridad no puede ser proporcionada por criminales o paramilitares. Es proporcionada por las fuerzas de seguridad, el gobierno, los pueblos indígenas y las organizaciones revolucionarias amigas”.

Las áreas que menciona el comandante son regiones indígenas remotas en la zona fronteriza entre Amazonas y Bolívar, muy alejadas del corazón minero histórico de Venezuela en el este de Bolívar. Pero a mediados de 2018 surgieron informes muy similares a unos 800 kilómetros de la frontera con Colombia, en el extremo este de uno de los municipios más ricos en oro de Bolívar, Sifontes.

“Se les puede ver en la entrada del sector Hoja de Lata, Tumeremo, en Anacoco, y San Martín de Turumbán. Usan pantalón de camuflaje, botas y camisa negra. No solo hay sujetos con acento colombiano, también indígenas, ya están reclutando personas”, son las palabras de un residente de la región en un informe de [El Universal](#) en mayo de 2018.

*“Están mejor preparados para la guerra que el propio ejército”.*

Los misteriosos colombianos no se identificaban públicamente con ningún grupo guerrillero conocido, pero su retórica resultaba familiar.

“Me dijeron que estaban aquí para defender a la nación de alguna invasión extranjera. Gobiernan sobre lugares específicos donde el gobierno les ha dado una parte de la minería”, dijo un líder religioso de Sifontes a InSight Crime, bajo condición de anonimato.

“Tienen buenas armas y están muy bien entrenados. Están mejor preparados para la guerra que el propio ejército”, agrega el líder religioso.

Hay confusión en cuanto a los grupos guerrilleros a los que pertenecen y en torno a sus orígenes, y solo unos pocos mineros, representantes de la oposición y periodistas que hablaron con InSight Crime mencionaron al ELN. Pero muchos mineros y residentes de la zona confirmaron que había nuevos actores criminales moviéndose por las zonas mineras de Bolívar: misteriosos guerrilleros con botas impermeables por las que se les conoce como patas de goma.

En la entrevista con el teniente coronel Solís, este también mencionó dos grupos diferentes que no se conocían antes: el Movimiento Che Guevara y el Grupo Revolucionario Hugo Chávez Frías. InSight Crime corroboró estos nombres con líderes sociales e investigadores locales.

*“ Si alguien está  
borracho el lunes,  
lo castigan”.*

“Para mí, no son guerrilleros, sino criminales”, dijo Solís a InSight Crime a principios de 2020, cuando era comandante de la base militar de Tarabay. “Si el ELN estuviera aquí, ningún otro grupo duraría una semana”.

Pero una representante indígena de San Martín de Turumbán, en el este de Sifontes, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, narra una historia diferente.

“Se identificaban como del ELN”, insistió en su conversación con InSight Crime. “No decían ese nombre, pero tenían marcas del ELN en la ropa. Tenían una gorra con una estrella roja y la cara del Che Guevara”.

La representante dice que la guerrilla convenció a los líderes indígenas para que les permitieran entrar, diciéndoles que había malos elementos operando dentro de la comunidad.

“Les dimos permiso para entrar, siempre y cuando estuvieran desarmados, para vigilar la seguridad”, afirma. “Pero luego, comenzaron a asumir otros roles. Empezaron a controlar el combustible que iba hacia Guyana, a cobrar extorsiones, a ir a las minas. Querían controlar las minas y lo lograron”.

Una vez obtuvieron el control, los guerrilleros comenzaron a imponer el orden en las minas de oro donde antes reinaba el caos.

“Tienen una choza donde lo inspeccionan a uno, le revisan los bolsillos para ver que no lleva armas ni drogas”, cuenta un hombre que trabajaba en una mina controlada por la guerrilla y quien no quiso ser identificado por

razones de seguridad. “Solo se puede beber el sábado y el domingo; después de la medianoche del domingo no se puede beber. Si alguien está borracho el lunes, lo castigan”.

Aunque la guerrilla era estricta, tanto los mineros locales como los líderes sociales y los investigadores coinciden en que su dominio era más justo que el de las bandas del pasado: los castigos eran trabajos forzados y no mutilaciones; los pagos por protección eran estandarizados y no impuestos por capricho; el reclutamiento era voluntario y no por coacción.

## Guerrilla, ejército y sindicatos

Desde el principio, hubo señales de que los intereses de la guerrilla en el este de Bolívar iban más allá del control de las minas locales.

“Hablan [de política] cuando hay reuniones”, le dijo el minero a InSight Crime. “Las reuniones son todas las semanas, a veces cada 15 días. Dicen que todo es para el Arco Minero, que una empresa vendrá a traer máquinas para hacer minería a cielo abierto”.

La idea de que el avance guerrillero estaba relacionado con los planes de Maduro para reavivar el sector minero atrayendo inversiones al AMO también fue mencionada por la oposición política.

“Las grandes multinacionales han exigido más seguridad en la zona para poder invertir”, dijo el representante de la oposición Américo de Grazia a [El Nuevo Herald](#) en 2018. “Y el Estado está tratando de garantizar esa seguridad utilizando al ELN, que creen que es más confiable que las bandas”.

*“[Los militares] dijeron que el 20 de diciembre era el ultimátum para que toda la población minera saliera”.*

“El ELN ha lanzado una ofensiva sin cuartel para eliminar a las bandas, y de esa manera las fuerzas armadas no se tienen que ensuciar las manos”, agregó de Grazia.

La llegada de la guerrilla coincidió con un cambio importante en la estrategia del Estado hacia a las pandillas mineras que habían controlado durante mucho tiempo el comercio regional de oro, también conocidas como sindicatos.

En [junio de 2018](#), el [gobierno anunció](#) una gran ofensiva de seguridad contra el sector del oro, y emitió una lista de objetivos, entre los que se encontraban muchos de los traficantes ilegales de oro a los que se les había permitido prosperar durante el mandato del exgobernador presuntamente corrupto de Bolívar, el general Francisco Rangel Gómez. Esta ofensiva fue llamada Operación Manos de Metal.

Muchos de los [sindicatos locales](#) de Bolívar pasaron abruptamente de ser aliados criminales a enemigos del Estado. Proliferaron los enfrentamientos sangrientos, dado que las unidades militares buscaban expulsar a las poderosas pandillas que habían controlado durante mucho tiempo las minas de oro ilegales de Bolívar. Muchos de los incidentes mostraban un patrón similar.

“Los locales denunciaron que guerrilleros del ELN trabajaron en conjunto con las fuerzas del Estado”, informó el periodista local [Germán Dam](#) en Twitter, después de que 100 agentes de las fuerzas de seguridad allanaron [la mina El Salto](#) en el municipio de El Callao. “Los primeros atacaron en horas de la madrugada y posteriormente los comandos del ejército y la policía hicieron lo mismo”.

Este patrón de asaltos aparentemente coordinados [continuó en 2019 y 2020](#). Varios de los otrora poderosos cabecillas de las bandas de Bolívar lograron escapar, pero fueron [dados de baja por las fuerzas de seguridad](#) en estados de Venezuela distantes de allí.

El epicentro de la actividad continuó siendo Sifontes, donde Solís, quien [ya era conocido](#) por presuntamente ordenar desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, era acusado de que estaba utilizando la base militar de Tarabay [como centro para coordinarse con la guerrilla](#).

En diciembre de 2019, los mineros se reunieron en la capital de Sifontes, el municipio de Tumeremo, gritando y portando pancartas. Exigían la salida inmediata de Solís de la base militar de Tarabay, en las afueras de la ciudad.

“Solís es el jefe de la guerrilla”, [decía una de las pancartas](#).

Los manifestantes afirmaban que, desde la masacre en Corre Gente, el ejército había tomado el control de [más de 30 minas](#) entre Tumeremo y la frontera con Guyana, bloqueándoles la entrada a los mineros locales.

“[Los militares] dijeron que el 20 de diciembre era el ultimátum para que toda la población minera saliera, y que quien estuviera en las minas después de eso sería asesinado”, dijo a InSight Crime a principios de 2020 un líder comunitario de Tumeremo, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad. “El comandante [Solís] me dijo: ‘Tengo una orden presidencial de cerrar las minas porque actualmente el gobierno no depende del petróleo, sino del oro’”.

“Ahora, no hay acceso a la minería artesanal, y se les da prioridad a las máquinas que el gobierno ha puesto”, agregó el líder comunitario.

## Un ejército en desaparición

El bloqueo de Tumeremo y la toma de las minas por el ejército parecían confirmar que el ELN había entrado a Bolívar para ayudarle al gobierno a arrebatárles el control de las riquezas del Estado a los sindicatos y preparar el terreno para el Arco Minero del Orinoco.

Pero las máquinas mineras y los inversionistas multinacionales no aparecieron. En cambio, mediante “alianzas estratégicas” con las autoridades se entregaron concesiones a cualquier persona que tuviera conexiones políticas y militares. La presencia guerrillera comenzó a disiparse, y muchos de los sindicatos permanecieron tan atrincherados como siempre.

En algunas regiones de Bolívar, la guerrilla no pudo hacer frente a la resistencia de las bandas mineras.

*“Me dijeron que los habían expulsado”.*

“En El Callao intentaron tomar [el sector] de El Perú, pero la banda de El Perú ha estado allí durante años. Conocen bien su área y están muy, muy bien armados”, explicó un periodista local, que habló con InSight

Crime bajo condición de anonimato. “Ha habido enfrentamientos y tiroteos, pero la guerrilla no ha podido ingresar a El Callao”.

En otras zonas, sin embargo, los guerrilleros al parecer renunciaron al control de las minas que habían tomado.

La mina de Cicapra, en la región de Guasipati, fue una de las primeras en ser **supuestamente tomada** por la alianza entre el ELN y el ejército. Pero cuando InSight Crime visitó la región a principios de 2020, mineros locales, comerciantes de oro, ingenieros y funcionarios del gobierno confirmaron que la mina no estaba en manos de la guerrilla, sino de uno de los sindicatos más poderosos de la zona, el **Tren de Guayana**.

A lo sumo, dieron indicios de que el ELN quizá había estado trabajando junto al grupo.

“Cuando yo estaba en Cicapra, también había algunas personas con vestimenta del ejército”, dijo un minero que no quiso ser identificado por razones de seguridad. “Eran colombianos. No sé quiénes eran. Tenían un arma que era como una miniametralladora”.

“Hay que cruzar el río para entrar a la mina; ahí lo revisan a uno y le preguntan de todo”, agrega el minero.

Otras fuentes señalan además que la guerrilla había estado prestando apoyo a los sindicatos aliados.

“Algunas [bandas] son enemigas [de la guerrilla] y otras son aliadas”, dijo un oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que prestó sus servicios en Bolívar. “Hay bandas que son entrenadas por la guerrilla. Otras son entrenadas contra la guerrilla”.

Los guerrilleros incluso comenzaron a desaparecer de las zonas más distantes cerca de la frontera con Guyana, donde habían **invertido** en el control de minas y el establecimiento de bases en las comunidades.

“[La guerrilla] ya no está aquí”, afirma la mujer indígena de San Martín de Turumbán. “Me dijeron que los habían expulsado”.

No obstante, muchos sindicatos permanecen. Algunos están liderados por jefes cuyos nombres aparecieron en la lista de objetivos de la Operación Manos de Metal, pero que nunca fueron perseguidos. Otros tienen cabecillas que ya habían sido sacados de la lista. Algunos de los que permanecen continúan resistiendo la presión de las fuerzas de seguridad.

Por eso muchas personas de la región creen que Manos de Metal y el asalto guerrillero no fueron medidas orientadas a eliminar a los sindicatos de Bolívar, sino una estrategia para obligarlos a colaborar con el gobierno.

“El objetivo era desplazar a los grupos que no encajaban en el sistema. Los eliminaban si no estaban produciendo o invirtiendo”, afirma el economista de minería venezolano. “Se trataba de consolidar el poder, y no de un sistema para mejorar la minería de oro”.

Los guerrilleros quizá actuaron como tropas de choque o ejecutores como parte de esta estrategia. Pero dado que se encontraban dispersos y a cientos de kilómetros de sus unidades centrales en la frontera con Colombia, se les dificultaba controlar un territorio tan disputado.

Sin embargo, el ELN no ha desaparecido por completo de Bolívar. Además de los informes esporádicos acerca de puestos de control u hombres misteriosos con ropa de camuflaje y botas de goma que apoyan a los sindicatos, hay señales de que la guerrilla ha estado intentando beneficiarse del oro de Bolívar en terrenos menos hostiles.

A mediados de 2020, el gobierno anunció una nueva iniciativa legal que permite la extracción de oro en **seis ríos** del centro y oeste de Bolívar. En las semanas posteriores a su aprobación, las comunidades indígenas de la cuenca del río Caura denunciaron la aparición de nuevas **dragas de minería** (balsas que succionan el lecho del río para extraer el oro).

Las protestas fueron recibidas con violencia, y algunos **representantes indígenas** informaron que un grupo armado vinculado a las nuevas operaciones mineras había atacado una de las comunidades, y que mataron a

tres personas. Aunque en la declaración no se nombra al grupo responsable, el representante de la oposición local [Américo de Grazia](#) afirmó una vez más que el ELN estaba detrás de los actos violentos.

Algunas fuentes que conocen la dinámica en la cuenca del Caura confirmaron la presencia del ELN, diciendo que se estaban dividiendo el territorio con disidentes de las FARC.

“Los guerrilleros son los que tienen el control en las minas de Caura”, dijo a InSight Crime un investigador ambiental, que prefirió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Su relato fue corroborado por un minero de la región, quien también pidió permanecer en anonimato.

La cuenca del Caura se encuentra en una región remota y relativamente nadie se la disputa. Allí habitan [grupos indígenas marginados](#), con quienes el ELN ha buscado durante mucho tiempo fomentar relaciones de colaboración y sumisión. Además, se encuentra cientos de kilómetros más cerca de las unidades centrales de la guerrilla. Por ahora, parece que la guerrilla regresó a su zona de confort.

En cuanto al corazón minero de Bolívar, en el municipio de Sifontes, el presunto colaborador militar del ELN, Ernesto Solís, ha sido asesinado, y apenas queda rastro de la guerrilla colombiana.

“Para mí, eso es un mito”, fue la respuesta típica de un residente de Tumeremo, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, cuando se le preguntó una vez más por la guerrilla. “Tal vez en algún momento hubo algunos disidentes, o guerrilleros o colombianos. Un pequeño grupo, en la zona de Bochinche [Corre Gente]. Pero ahora, no. Definitivamente no”.

En cambio, ha surgido un nuevo sindicato que busca el control de Tumeremo. Conocido como la Organización R (OR), la retórica del grupo incluye una promesa que ya resulta familiar: poner orden en el caos. Pero esta vez, afirma el grupo, no será para el beneficio de las élites corruptas y las pandillas depredadoras, sino para los propios mineros.



### 3. El “Rebelde del Sur”: el ascenso de la Organización R

*Los sindicatos de Bolívar, bandas que controlan la minería ilegal de oro, son despiadados. Manejan sus operaciones con mano de hierro, obligando a los mineros, adultos y niños por igual, a trabajar largas horas en condiciones peligrosas por una insignificante retribución. Pero ante una campaña de violencia liderada por las fuerzas armadas venezolanas por el control del oro, uno de esos sindicatos innovó. La Organización R ha adoptado tres caras: una de banda criminal, otra de organización comunitaria y la otra de fuerza política.*

Hacia las 11 de la noche del 6 de abril de 2020, el teniente coronel Ernesto Solís volvía a la base militar que comandaba, cerca de la ciudad de Tumeremo, en el estado de Bolívar, al este de Venezuela. Allí lo **interceptaron varios hombres armados** en motocicleta, quienes dispararon repetidamente contra su vehículo. El ataque dejó muertos a Solís y al sargento que lo acompañaba.

La muerte de Solís tenía un aura de inevitabilidad. Al mando de las operaciones militares en una de las regiones mineras más ferozmente disputadas de Venezuela, había tenido que enfrentar numerosas acusaciones de abusos y alianzas con grupos armados, y ya había sobrevivido a otros ataques contra su vida, según su propio relato. Tenía muchos enemigos.

Pronto, la policía **dejó claro** cuáles de esos enemigos creían que eran responsables de la emboscada: la Organización R (OR) y su líder, **Eduardo José Natera Balboa**, alias “Run” o “Pelón Natera”.

En ese tiempo, pocas personas fuera del estado Bolívar sabían de la existencia de la OR. Los informes de la región estaban más preocupados por los movimientos del ejército para arrebatar el control de la minería

de oro a las bandas criminales de la región, una campaña dirigida por el círculo más cercano al presidente Nicolás Maduro, y, según señalaban varias investigaciones de medios y fuentes locales, coordinada con las guerrillas colombianas.

Hoy en día, sin embargo, la OR hábilmente ha combinado la fuerza armada con el trabajo social y la acción política para posicionarse como uno de los principales poderes en el corazón minero de Bolívar. Al hacerlo, ha puesto en evidencia las fallas de la estrategia del régimen de Maduro para convertir el anárquico sector minero de Bolívar en una potencia económica que pare la maltrecha economía venezolana y llene los bolsillos de sus élites corruptas.

## Quién es quién en la Organización R y en torno a ella

La Organización R (OR) ha cobrado relevancia en Bolívar, estado rico en minería de oro en Venezuela. Conformado por pandillas mineras, el grupo afirma que defiende a las comunidades mineras, pero a la vez se apodera de una buena tajada del oro que estas producen. Su ala caritativa, conocida como Fundación 3Rs, tiene conexiones con el Movimiento por la Paz y la Vida, una iniciativa gubernamental que promueve la cultura y el deporte.



**Eduardo José Natero Balboa**  
Alias "Run" o "Pelón Natera"

Líder de OR



Noviembre 2021

*insightcrime.org*

Fuente: Investigaciones de InSight Crime, policía de Venezuela

### De la cancha de fútbol al campo de batalla

Las riquezas del corazón minero de Venezuela en Bolívar han sido objeto de disputa de muchas bandas criminales —conocidas localmente como *sindicatos*— por más de una década. Pero desde el comienzo, la OR fue distinta.

El fundador del grupo, Run, era más conocido como jugador del equipo local de fútbol. Pero su historial criminal data de más de una década atrás. En 2008, fue **condenado** por una serie de delitos menores, pero se escapó de la prisión local de El Dorado.

Run formó la OR, también conocida como las 3R, de lo que quedó de las bandas mineras que antes habían dirigido la actividad en Tumeremo, **según Américo de Grazia**, líder local de la oposición política. Además reforzó el grupo con el reclutamiento de desertores del ejército venezolano, como informó a InSight Crime un alto oficial de gobierno del estado de Bolívar, quien habló en condición de anonimato.

El oficial añadió que “de todas las bandas que operan en Bolívar, para mí, la OR es la más organizada, porque tienen una capacidad logística increíble y entrenamiento al estilo colombiano”.

Run también buscó el apoyo de la comunidad local de Tumeremo entregando **alimentos y juguetes a los niños; organizando eventos deportivos** y actividades para los jóvenes locales; **llevando servicios públicos o ayudando a mejorar la infraestructura existente** e incluso con la financiación de un servicio local de ambulancia.

*“En el computador, tenían un censo de todas las personas que vendían oro. **Todo, absolutamente todo, estaba contabilizado**”.*

Este trabajo social se realizó bajo la bandera de una organización de caridad: la Fundación 3R. Aunque en público tanto la fundación como el grupo armado niegan vehementemente tener cualquier vínculo, un miembro de la OR, en entrevista con InSight Crime vía WhatsApp bajo la condición de que se reservara su identidad, confirmó que en Bolívar es de conocimiento general y algo que la **OR ha reconocido en el pasado**: son dos caras de la misma organización.

“Todo lo que la ciudad necesite, lo hacemos aparecer por medio de la Fundación”, dijo.

Las 3R también adoptó una estrategia diferente hacia la minería. Mientras que la mayoría de los sindicatos se centran en exprimir hasta la última gota de las ganancias por la actividad a punta de pistola, la OR se ha posicionado como defensora de los mineros y las comunidades que viven de la actividad.

“Somos jóvenes preocupados por la falta de orden en las minas y el irrespeto hacia la otra gente”, señaló un líder de 3R, quien accedió a responder las preguntas de InSight Crime por correo electrónico bajo la condición de que se mantuviera su anonimato. “Hemos propuesto imponer orden, basado en el respeto hacia los otros, respeto por las mujeres y los niños, respeto por el

trabajo, la necesidad de honrar las deudas, respeto por la religión de la gente, el derecho de los niños a la educación y la recreación, y el respeto por la salud de la población minera”.

Sin embargo, la versión de “orden” de la OR tiene un precio. Según un miembro de OR, contactado por WhatsApp, ese precio es el 15 por ciento de la producción de oro. La OR también regula fuertemente la actividad comercial del metal, incluso, su precio. Un comunicado que se hizo circular entre la comunidad y que llegó a manos de InSight Crime comienza con: “Estamos actualizando los precios del oro en dólares, efectivo y transferencias”. Después de enumerar los nuevos precios, el comunicado concluye: “Los precios establecidos por la OR deben respetarse. De no hacerlo, se aplicarán medidas correctivas según se estime necesario”.

Para quienes viven en el territorio de la OR, “medidas correctivas” se entiende como una amenaza apenas disimulada, pues las reglas se imponen brutalmente. En un video de la OR que circuló por Bolívar, se muestra a un hombre semidesnudo agarrando su cabeza con una marca alrededor de su cuello que dice: “No se pega a las mujeres”. Incitado por una voz detrás de la cámara, este confiesa que pegaba a su pareja. “No habrá próxima vez”, le advierte la voz.

Pero, en comparación con la “justicia” que imparten otras bandas mineras, que incluye la mutilación y el desmembramiento, según la [evidencia recogida por grupos de derechos humanos](#), esos castigos parecen relativamente humanos para muchos en Bolívar. Pese al costo financiero y la crueldad de la justicia extrajudicial del grupo, muchos de los residentes y mineros entrevistados por InSight Crime recibieron bien la seguridad que el grupo les ha brindado.

“Ya no hay extorsión ni secuestros, todas esas cosas con las que teníamos que vivir, el acoso, la persecución, eso se acabó”, comentó un residente de Tumeremo, que no quiso ser identificado por motivos de seguridad.

Cuando InSight Crime entrevistó a Solís, tres meses antes de su asesinato, describió cómo la OR se había convertido en un enemigo formidable, al mezclar el poder armado con las obras sociales. El respaldo de la población local servía como una red de inteligencia para el grupo, y le daba una ventaja vital sobre las fuerzas de seguridad y sus rivales criminales.

Pero fue su descripción de cuando visitó las oficinas locales del partido político, la Unidad Popular Venezolana (UPV), miembro de la coalición de partidos de izquierda afines al gobierno chavista, lo que reveló hasta dónde se había extendido la influencia de la organización.

“En el exterior, la oficina era de la UPV, pero dentro era todo la OR. Los documentos decían ‘Organización R’”, señaló. “En el computador, tenían un censo de todas las personas que vendían oro. Todo, absolutamente todo, estaba contabilizado”.

La cooptación de la sede local de la UPV —[confirmada en los pronunciamientos públicos de la misma OR](#)— no fue el límite de las aspiraciones políticas del grupo. La Fundación 3R también trabajó muy de cerca con el [Movimiento por la Paz y la Vida](#), un [programa del gobierno nacional](#) que promueve las actividades deportivas y culturales en comunidades desfavorecidas.

El director del programa es un antiguo jugador profesional de básquetbol y ex viceministro de deportes, [Alexander “Mimou” Vargas](#), quien fue nombrado en el cargo directamente por la Presidencia. Las actualizaciones en redes sociales de Vargas y la Fundación 3R presentan videos de este [inaugurando escenarios deportivos y programas de salud](#) en compañía de representantes de la Fundación.

## El espejismo de Maduro

La oferta de la OR de imponer orden y seguridad llegó en el momento preciso para convocar a las comunidades mineras de Bolívar, cansadas de años de violencia y caos a manos de bandas criminales y las fuerzas de seguridad.

Cuando el grupo inició su expansión en 2019, la certeza de que los grandes planes del gobierno de Maduro de construir un pujante sector minero en lo que llamó el [Arco Minero del Orinoco](#) (AMO) eran algo más que una ilusión.

El gobierno no había logrado atraer ni el capital ni la experticia necesarias para convertir un sector minero rudimentario y no regulado en una industria moderna. En lugar de eso, atrajo a un número creciente de actores de la élite chavista, otorgando acceso a la riqueza de la región a cualquiera, desde [la familia del presidente](#) hasta los [gobernadores de los estados](#).

*“Todos tenemos un precio. Puede ser dinero o familia, pero **tenemos un precio**”.*

“[El régimen de Maduro ha estado] repartiéndose el estado como si fuera su territorio. Cada quien recibe parte del botín”, opinó un exoficial del ejército que fue un alto mando en Bolívar antes de su retiro y habló con InSight Crime bajo la condición de que se mantuviera su anonimato.

El oro de Bolívar también comenzó a financiar una nómina a la sombra para las fuerzas de seguridad. El personal de seguridad raso [recibe un exiguo salario](#) del Estado venezolano casi en bancarrota, de manera que muchos se

aseguran su subsistencia tomando una parte de las economías criminales en las zonas a las que están destinados. La rotación constante de personal permite la distribución de estas oportunidades entre las fuerzas. Es así como la región minera de Bolívar es ahora uno de los destinos más codiciados del país, según el oficial retirado.

“Cuando llegué por primera vez al sur de Bolívar, eso era un castigo”, recordó. “Ahora, la gente se pelea por eso como si fuera un premio”.

Pronto la región se vio inundada por diferentes ramas de las fuerzas de seguridad, entre las que se contaban el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía y los servicios de inteligencia. Hay **evidencia** sólida de que el ejército comenzó trabajando con las guerrillas colombianas para combatir a los sindicatos. Pero cuando la presencia guerrillera comenzó a disiparse, las fuerzas de seguridad hicieron alianzas con los sindicatos, a raíz de lo cual apuntaban sus armas solo a quienes no cooperaban o no les pagaban.

InSight Crime habló con numerosas fuentes en Bolívar, que expresaron su deseo de mantener su identidad en reserva, entre ellos personal activo y retirado del ejército y la policía, quienes describieron cómo cada división de las fuerzas de seguridad encontró su manera de beneficiarse del negocio mediante acuerdos hechos con los sindicatos y otros actores dedicados a las operaciones mineras.

Algunos trabajan directamente con grupos criminales para controlar o extorsionar las minas, mientras que otros protegen los intereses de las élites políticas y castrenses. Otros asumen tareas más especializadas, como el cobro a quienes introducen gasolina de contrabando o sacan oro de la región, o cerrando investigaciones en curso por homicidios u otros delitos.

Incluso los no corruptos cuando llegan a Bolívar pronto son seducidos por el sistema, según un oficial activo del ejército, apostado en Bolívar, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

“Todos tenemos un precio. Puede ser dinero o familia, pero tenemos un precio”, confesó. “No todos se compran con oro. Con otros, dicen, ‘Pásame información o lo mato a usted y su familia, y lo corto en pedacitos”.

Pero ahora se está presentando un nuevo problema. Es posible que no haya suficientes riquezas para todos. Los mineros informales han estado agotando los depósitos auríferos de fácil acceso, cerca de la superficie, como lo explicaron expertos regionales en minería en conversaciones con InSight Crime, y las operaciones prometidas con tecnología avanzada que podrían explorar a mayor profundidad no aparecen.

Como resultado de eso, las élites chavistas y las numerosas divisiones de las fuerzas de seguridad se han encontrado en competencia por los recursos cada vez más escasos, no solo con los sindicatos, sino entre ellos mismos.

“Es el caos total, un conflicto en el que el ganador es la persona que tiene más poder, el más cercano a la cúpula”, concluyó el oficial retirado.

## La guerra y la paz

En Sifontes, Solís llegó a ser una muestra de estas tensiones. Las **comunidades locales lo acusaron** de ser responsable de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, y alegaron que **colaboraban con la guerrilla colombiana**. La situación llegó a un punto crítico en diciembre de 2019, cuando el ejército tomó el control de varias minas locales y bloqueó las rutas de acceso que conducían a ellas.

Para la OR, él se convirtió en el principal obstáculo para su toma de poder en Tumeremo.

“Solís nos hizo la vida imposible; no nos dejaba trabajar”, comentó el miembro de la OR. “Mató muchos inocentes, algo que Run no hace”.

El asesinato de Solís no solo facilitó la toma de control de Tumeremo por la OR, sino que también marcó el inicio de su expansión a nuevas regiones, pues se expandieron al norte de Sifontes e incursionaron en el municipio vecino de El Callao.

*“Cada bando se mantendrá en su zona.  
No somos amigos.  
No somos nada”.*

Este avance pronto les valió nuevas enemistades, pues entraron a territorios controlados por uno de los sindicatos más antiguos y poderosos de la región: el **Tren de Guayana**.

En el pasado, el Tren de Guayana había recibido apoyo del exgobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez, según **testimonios de delatores del interior de las fuerzas de seguridad**. Las investigaciones de los medios y los mineros de la región sostienen que aún hoy la banda sigue contando con el apoyo de aliados en el poder. Ha habido incluso **acusaciones** de que el Tren de Guayana coordinó operaciones con una facción del ejército y emplea soldados activos y exmilitares como mercenarios.

Pese a tener que confrontar un grupo criminal armado y al ejército, la OR sacó a sus nuevos enemigos de al menos tres minas en meses de **enfrentamientos**. Pero aunque desplegaron pericia militar, arsenal de alto poder y la disposición a

usar violencia letal, la OR volvió a describir su expansión como una campaña honesta para proteger a los mineros de la depredación del Tren de Guayana y sus aliados en el ejército.

“El Tren de Guayana le roba a la gente. Irrespetan a mujeres y niños. No respetan los espacios públicos y abusan de los trabajadores”, señaló el líder de la OR.

Una vez más, su retórica era repetida por los mismos mineros. Después de que la OR **acabó** con el control del Tren de Guayana sobre una mina ubicada entre Tumeremo y el bastión del Tren de Guayana, en Guasipati, los mineros organizaron una conferencia de prensa.

“¡Gracias a la Organización de R, que nos liberó de la esclavitud del Tren de Guayana!”, exclamó uno de los voceros. El evento terminó con los mineros en pleno gritando al unísono “¡R! ¡R! ¡R!”.

Después de meses de cruentas luchas, en septiembre, el conflicto tuvo un abrupto fin, o al menos una pausa. La OR **divulgó un comunicado** declarando que habían cerrado un acuerdo de paz con el Tren de Guayana y el gobierno. Según el comunicado, las zonas alrededor de las minas que se habían disputado, serían ahora “zonas de paz”, libres de grupos armados.

Los rivales siguen siendo enemigos, como le aclaró Run a InSight Crime, en respuesta a varias preguntas escritas por WhatsApp. Pero la lucha se había acabado, por el momento.

“Todo el mundo quiere paz”, dijo. “[Pero] la relación no ha cambiado. Cada bando se mantendrá en su zona. No somos amigos. No somos nada”.

## ¿Una nueva alianza?

El anuncio de la tregua fue una sorpresa, pues pareció que la OR salía ganando del conflicto. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la participación de la **Corporación Venezolana de Minería (CVM)**, que, según Run, medió para el acuerdo y administrará las minas disputadas.

Ahora que la visión de Maduro de una revitalización de las fortunas de Venezuela gracias al Arco Minero del Orinoco ha dado paso a la cruda realidad, y al saqueo de los recursos naturales por parte de élites corruptas y grupos criminales, la CVM es ahora responsable de garantizar que los funcionarios del gobierno venezolano sigan sacando su tajada.

El organismo cobra un porcentaje de la producción de cada concesión minera autorizada por el gobierno. Pero según múltiples fuentes de la región, que hablaron con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato, tiene acuerdos similares con las operaciones ilegales que manejan los sindicatos.

Sin embargo, según afirman las fuentes, la CVM se está viendo frustrada, pues muchos de los actores detrás de las minas, sobre todo del ejército, no cumplen su parte del trato.

“Hay un fuerte enfrentamiento [entre la CVM y el ejército], porque la CVM no está recogiendo lo que se le debe, y la mayoría de los dueños [de las operaciones mineras] son generales”, comentó el alto oficial del gobierno de Bolívar.

La OR, en contraste, se ha forjado una reputación de ser socios confiables, capaces de mantener el flujo de oro. El grupo parece haber ayudado a entregar el control de las tres minas directamente a las manos de la CVM, al menos por el momento.

Que la OR llegue a ser mejor aliado para la CVM que el ejército representaría un cambio para una organización que ha cultivado una imagen de Robin Hood, como ilegales rectos, negándose a entrar en los juegos de poder de élites distantes y gánsters locales, a la par que defienden a los trabajadores explotados por esos bloques de poder.

“Run es el rebelde del sur, porque no quiere alinearse con ninguna de las fuerzas de seguridad ni con ningún gran nombre en el gobierno”, señaló el miembro de la OR.

Aunque la OR juega un peligroso juego en Bolívar, lo ha hecho con estilo. Mientras Maduro tiene problemas para controlar el caos que desató en Bolívar, el rebelde del sur se está perfilando como el aliado comercial preferido del estado.

# La Organización

**InSight Crime** es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.

---

Cumplimos esta misión:

- Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el crimen organizado en la región;
- Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus múltiples manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los derechos humanos, el gobierno, la política de drogas y otros problemas sociales, económicos y políticos;
- Organizando talleres para periodistas, académicos y organizaciones no gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto, sobre cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus fuentes;
- Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando, traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia más amplia;
- Desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado;
- Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos y grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las estrategias y los obstáculos que hay en la implementación de políticas de seguridad ciudadana en el terreno.

Conozca más sobre *InSight Crime* [aquí](#).

